

NORMATIVA INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN: METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS^(*)

Carolina Díaz Romero
Legal Officer en ACTUE Colombia¹

RESUMEN

El presente artículo aborda la evolución de la normativa internacional en anticorrupción y fraude, repasando los principales Convenios como el de Naciones Unidas contra la Corrupción así como la normativa y metodología propia tanto de OCDE con su Convenio “Anticohecho” como del Consejo de Europa y su Grupo de Estados contra la corrupción GRECO.

Posteriormente se centra el foco en el abordaje normativo que la Unión Europea hace de esta temática así como se presentan orientaciones metodológicas y herramientas de la Comisión Europea en la lucha contra el fraude.

ABSTRACT

This article addresses the evolution of international regulations on anticorruption and fraud, reviewing the main Conventions such as the United Nations UNCAC, as well as the regulations and methodology of both the OECD with its "Anti Bribery" Convention and the Council of Europe and its Group of States against corruption GRECO.

Subsequently focuses on the regulatory approach that the European Union makes of this subject as well as methodological guidelines and tools of the European Commission in the fight against fraud.

1. INTRODUCCIÓN

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana” Kofi A. Annan SG ONU 2004.

La corrupción y el fraude perjudican gravemente a la economía y a la sociedad. Muchos países del mundo padecen una corrupción profundamente arraigada que frena su desarrollo económico, debilita la democracia y va en detrimento de la justicia social y del Estado de Derecho.

¹ Transparency & Anticorruption project from EU to Colombia.

Realizando un análisis de la normativa internacional más relevante en anticorrupción revisaremos los principales aspectos de la *Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción*, presentaremos las iniciativas actuales en esta materia en el seno de otras entidades multilaterales como la OCDE y su *Convención contra el Cohecho internacional* así como el Grupo de trabajo *GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción* dependiente del Consejo de Europa.

Por último se analizará el marco jurídico anticorrupción de la Unión Europea, centrando el análisis en orientaciones metodológicas de la Comisión Europea sobre la prevención del riesgo del fraude, herramientas y ejemplos de buenas prácticas.

2. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN

No es hasta finales de la década de los 90, cuando la corrupción comenzó a ser un tema de interés y preocupación a escala internacional. Anteriormente se iniciaron procesos de acuerdos de acción conjunta referidos a abordajes específicos, como el soborno o limitados a zonas geográficas concretas sin abarcar todas las regiones del mundo, ignorando a la mayor parte de los países de Asia y del Medio Oriente.



- **1988** UNIÓN EUROPEA.- Se crea la "*Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude*" (UCLAF), integrada en la Secretaría General de la Comisión Europea. La UCLAF colabora con los departamentos antifraude nacionales y ofrece la coordinación y la asistencia necesarias para luchar contra el fraude transnacional organizado. En los inicios de los años 90 las competencias de la UCLAF aumentan gradualmente de acuerdo con las recomendaciones del Parlamento Europeo.
- **1997** OCDE.- *Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales* (también conocido como "Convenio Anticohecho") Este convenio se limita a los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en transacciones comerciales.
- **1999** Creación OLAF.- Tras los acontecimientos que culminan con la dimisión de la Comisión Santer, se propone la creación de un nuevo organismo antifraude (OLAF) con mayores poderes de investigación. Las propuestas dan lugar a:
 - La creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) con competencias de investigación independiente (Decisión 1999/352).
 - Las normas generales para las investigaciones de la OLAF (Reglamento 1073/1999).
- **1999** CONSEJO DE EUROPA.- Convenios penal y civil contra la corrupción así como la creación del grupo de trabajo *GRECO Grupo de Estados contra la Corrupción*.
- **2005** ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.- *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción* (UNCAC).

- 2009.- *Recomendación para reforzar la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros* en las transacciones comerciales internacionales y sus Guías de buenas practicas.
- *Recomendación sobre medidas fiscales*, son los instrumentos de la OCDE que obligan a los países miembros a luchar contra la corrupción de agentes públicos extranjeros, tipificándose a la vez el blanqueo de dinero como delito conexo al de corrupción.
- 2011.-La Comisión Europea adopta una *Estrategia Integral de lucha contra el fraude*, con el fin de mejorar la prevención y la detección del fraude, las condiciones para la investigación del fraude, la recuperación de activos y disuasión.
- 2014.- *Primer Informe Anticorrupción UE*, como herramienta de control y armonización en la materia.
- 2015.- Trasposición Directivas europeas sobre contratación pública, fruto de las orientaciones de la Comisión Europea en materia anticorrupción.

2.1. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Entró en vigor en diciembre de 2005, se estructura en cuatro capítulos fundamentales:

1. Prevención
2. Penalización
3. Cooperación internacional y
4. Recuperación de activos

Sus herramientas de aplicación son la Conferencia de Estados parte de la UNCAC así como los servicios de la Secretaría General de la ONU. La Conferencia de Estados Parte en noviembre de 2009 adoptó el mandato del *Mecanismo de revisión* de su aplicación.

La Convención fomenta la participación de la sociedad civil en este mecanismo y para ello es clave el rol de la Coalición UNCAC, red global integrada por más de 350 organizaciones de la sociedad civil en más de 100 países, que han asumido el compromiso de impulsar la ratificación, la implementación y el monitoreo de la Convención de la ONU contra la Corrupción (CNUCC). Moviliza acciones de la sociedad civil vinculadas con la CNUCC en el ámbito internacional, regional y nacional así como la transparencia en las conclusiones las evaluaciones del mecanismo de revisión.

Adentrándonos en los capítulos principales:

Prevención a la corrupción. En el capítulo que trata de la prevención a la corrupción, la Convención prevé que los Estados Partes implementen *políticas efectivas* contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad civil y demuestren los principios del Estado de Derecho, tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad, entre otros.

Los Estados Parte deben:

- Adoptar sistemas de selección y reclutamiento con criterios objetivos de mérito.
- Tomar medidas para aumentar la transparencia en el financiamiento partidos políticos.
- Desarrollar códigos de conducta que incluyan medidas de estímulo a denuncias de corrupción por parte de los servidores y de sanción al recibimiento de regalos o de cualquier acción que puede causar un conflicto de intereses.
- Procesos licitatorios deben propiciar la amplia participación y disponer de criterios pre-establecidos, conjuntos e impersonales.
- Rendición de cuentas públicas a los ciudadanos.
- Estimular la participación de la sociedad civil en ese proceso.

Finalmente, subraya que la independencia del poder judicial y de la fiscalía es fundamental para combatir la corrupción.

En el sector privado. Entre ellas: desarrollar estándares de auditoría de contabilidad para las empresas; proveer sanciones civiles, administrativas y penales efectivas y que tengan un carácter inhibitorio para futuras acciones; promover la cooperación entre los aplicadores de la ley y las empresas privadas; prevenir el conflicto de intereses, prohibir la existencia de contabilidades paralelas en las empresas; y desestimular la exención o reducción de impuestos a gastos considerados como soborno o otras conductas similares.

Penalización y aplicación de la ley. En el capítulo sobre penalización y aplicación de la ley, la Convención pide a los Estados Parte que introduzcan, en sus ordenamientos jurídicos, *tipificaciones penales* que incluyan no solamente las formas básicas de corrupción, como el soborno o desvío de recursos públicos, sino también actos que contribuyan a la corrupción, tales como la obstrucción de la justicia, el tráfico de influencias y el lavado de recursos provenientes de la corrupción.

Cooperación internacional. Este capítulo enfatiza la importancia de la colaboración internacional para el éxito de los esfuerzos en la lucha contra anticorrupción, tal como la *asistencia legal mutua* en el curso de las investigaciones; en la recolección y transferencia de pruebas, en los *procesos de extradición*, rastreo, embargo de bienes, aprensión y confisco de productos de la corrupción.

La Convención innova en relación a tratados anteriores al *permitir la asistencia legal mutua aún en ausencia de doble incriminación*, cuando no haya medidas coercitivas. El principio de la doble incriminación prevé que un país no puede extraditar a personas que cometan actos que no son considerados delito en su territorio. Sin embargo, a partir de la Convención, esos requisitos se tornan más maleables, una vez que la Convención prevé que un mismo delito no es definido con los mismos términos o categorías pueden ser considerados como equivalentes, posibilitando la extradición.

Recuperación de activos. La recuperación de activos es una importante innovación y un principio fundamental de la Convención. Los Estados Partes deben propiciar la aplicación de extensas medidas de cooperación y asistencia en este campo, para que se hagan valer los intereses de las víctimas y dueños legítimos de estos recursos.

Limitaciones de la UNCAC

No obstante, varias características de este mecanismo pueden limitar su potencial para abordar algunos de los sectores más vulnerables para la corrupción:

- Se trata de un instrumento intergubernamental, el sistema de revisión transversal puede dejar fuera ámbitos políticos de especial importancia como la Contratación pública;
- Incluye a Estados parte con una gran diversidad de legislaciones anticorrupción p.e son menos estrictas que las de la UE;
- Los ciclos de revisión tendrán una duración relativamente larga y,
- Las recomendaciones a los Estado parte que no sean aplicadas pueden tener un seguimiento limitado, dada la ausencia de un poder sancionatorio coercitivo por parte de la ONU.

2.2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo OCDE

El *Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (Convención Anticohecho)* de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo (OCDE) se centra en la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. Dicha Convención junto a las recomendaciones de Buenas prácticas y en materia fiscal emitidas en 2009 son los principales instrumentos de la OCDE en materia anticorrupción.

La corrupción en la adjudicación de contratos tiene costos sociales, políticos, ambientales y económicos, que ningún país puede ignorar. Existen serias consecuencias cuando los servidores públicos toman sobornos al adjudicar contratos a negocios extranjeros para servicios públicos como infraestructuras o provisión de servicios básicos como agua, gas o electricidad. La OCDE dirige los esfuerzos globales para nivelar las condiciones de competencia leal en transacciones internacionales luchando por eliminar el cohecho de servidores públicos cuando se compite por contratos e inversiones.

Este Convenio, ha sido suscrito hasta la fecha por 41 países incluyendo los 34 miembros de la OCDE (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía), más Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Letonia, Rusia y Sudáfrica.

El Convenio estipula obligaciones para los países en cuatro aspectos: Penal, Contable, Blanqueo de Dinero; Asistencia legal mutua:

Penal: El Convenio establece la obligación de definir como delito y castigar el cohecho realizado para la obtención de algún contrato internacional. Este instrumento también sanciona la complicidad.

Contable: Establece recomendaciones a las empresas para prevenir el encubrimiento de algunos gastos en los registros contables. Se sancionan las omisiones, alteraciones, fraude y falsificaciones de registros, cuentas, estados financieros y libros con el propósito de ocultar el cohecho.

Blanqueo de dinero: El detectar un pago de soborno ilegal relacionado con transacciones internacionales es suficiente para provocar la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales para que esos pagos puedan ser confiscados.

Asistencia legal mutua: Si se utilizan canales financieros internacionales para ocultar o realizar el cohecho internacional, el Convenio obliga a los países signatarios a proveer el apoyo legal oportuno, además de establecer provisiones relativas a la extradición.

¿Cómo se aplica la Convención?

Los delegados del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE estimulan la revisión entre pares y al mismo tiempo actúan como examinadores para otros países. Este proceso mutuo de evaluación crea presión por parte de los miembros del Grupo de Trabajo y motiva a los países a asegurar el más alto nivel de cumplimiento de la Convención y a tomar acciones concretas para luchar contra la corrupción.

El proceso de seguimiento de la Convención prevé tres fases de evaluación:

La *Fase 1* de evaluación se centra en una *revisión profunda de las leyes nacionales* y otras medidas legales de los países para implementar la Convención, para asegurar que cumplan sus altos estándares.

La *Fase 2* supervisa la *efectividad en la práctica de los marcos legislativos e institucionales* anticohecho de los Estados Miembros. Esta fase incluye una *visita in-situ* al país evaluado.

El propósito de la *Fase 3* es mantener una *evaluación actualizada de las estructuras* establecidas por los Miembros de la Convención anticohecho. Esta fase implica una evaluación más corta y especializada que la Fase 2 y se concentra en los siguientes tres pilares:

- El progreso alcanzado por los Miembros de la Convención sobre las debilidades identificadas en la Fase 2;
- Los problemas emanados por los cambios en la legislación nacional o el marco institucional de los Miembros; y
- Los esfuerzos y resultados en la implementación y otros asuntos claves para todo el grupo.

2.3. Consejo de Europa y su grupo de Estados contra la corrupción GRECO

El Grupo de Estados Contra la Corrupción (en adelante GRECO) se creó con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra la corrupción realizando un seguimiento mutuo del cumplimiento de los estándares anticorrupción adoptados por el Consejo de Europa. Este mecanismo de seguimiento se trata de un proceso dinámico de evaluación mutua y presión social, que ayuda a identificar las deficiencias en las políticas nacionales anticorrupción, provocando reformas legislativas, institucionales y prácticas necesarias. GRECO también proporciona una plataforma para compartir las mejores prácticas en la prevención y detección de la corrupción.

La membresía en GRECO, no se limita a los Estados miembros del Consejo de Europa, cualquier Estado que participe en la elaboración del acuerdo parcial ampliado puede unirse notificando al Secretario General del Consejo de Europa. Además, cualquier Estado que se convierta en Parte de las Convenciones de Derecho Penal o Civil sobre Corrupción accede automáticamente a GRECO y sus procedimientos de evaluación. Actualmente, GRECO comprende 49 Estados miembros (48 Estados europeos y los Estados Unidos de América).

Cada Estado miembro designa hasta dos representantes que participan en las sesiones plenarias de GRECO con derecho a voto; cada miembro también proporciona a GRECO una lista de expertos disponibles para participar en sus evaluaciones. Asimismo se ha otorgado la condición de observador OCDE y a la ONUDD.

¿Cómo trabaja GRECO?

GRECO monitorea a todos sus miembros en igualdad de condiciones, a través de un proceso dinámico de evaluación mutua y presión de grupo. Todos los miembros participan y se someten sin restricción a los procedimientos de evaluación y cumplimiento mutuo. El mecanismo de seguimiento de GRECO comprende:

- Un procedimiento de *evaluación "horizontal"* (todos los miembros son evaluados dentro de una ronda de evaluación) que conduce a recomendaciones encaminadas a promover reformas legislativas, institucionales y prácticas necesarias;

- Un *procedimiento de cumplimiento* diseñado para evaluar las medidas tomadas por sus miembros para implementar las recomendaciones.

Este mecanismo de evaluación funciona en ciclos, llamados Rondas de evaluación, cada una cubriendo temas específicos.

El proceso de evaluación sigue un procedimiento bien definido, donde un equipo de expertos es designado por GRECO para la evaluación de un miembro en particular. El análisis de la situación en cada país se lleva a cabo sobre la base de respuestas escritas a un cuestionario e información recopilada en reuniones con funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil durante una visita al país. Luego de la visita in situ, el equipo de expertos redacta un informe que se comunica al país bajo escrutinio para que se formulen comentarios antes de que finalmente se presente al GRECO para su examen y aprobación. Las conclusiones de los informes de evaluación pueden indicar que la legislación y la práctica cumplen, o no cumplen, con las disposiciones bajo escrutinio. Las conclusiones pueden dar lugar a recomendaciones que requieren medidas dentro de los 18 meses o a las observaciones que los miembros deben tener en cuenta, pero que no están formalmente obligados a informar en el procedimiento de cumplimiento posterior.

Debilidades GRECO

Si bien la Unión Europea (en adelante UE) lo considera como el instrumento más integrador existente pertinente para la UE, en la medida en que todos los Estados miembros participan en él, dada la limitada visibilidad del proceso de evaluación intergubernamental y sus mecanismos de seguimiento, hasta el momento no ha generado en los Estados miembros la voluntad política necesaria para abordar la corrupción de manera efectiva.

Por otra parte, GRECO supervisa el cumplimiento de una gama de normas anticorrupción establecida por el Consejo de Europa y, en consecuencia, por lo que se centra menos en ámbitos muy sensibles para la corrupción como lo es la contratación pública. Por último sería deseable que GRECO realizara análisis comparativos y, por ende, identificara tendencias de corrupción por país o región que pudiera dar lugar a la generación e intercambio de buenas prácticas o el aprendizaje *inter pares*.

3. LA UNIÓN EUROPEA Y SU ESTRATEGIA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN

Se estima que la corrupción por sí sola cuesta 120.000 millones de euros al año a la economía de la UE, tan solo un poco menos que el presupuesto anual de la Unión.

Dado que los Estados miembros gestionan el 80% de los fondos de la UE, también son responsables de investigar y enjuiciar los casos de corrupción y fraude relacionados con el presupuesto de la Unión; es una responsabilidad nacional por tanto los Estados miembros disponen de las instituciones y los instrumentos legales necesarios para ello. No obstante, la UE les ayuda en sus investigaciones a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

En la última década se han realizado esfuerzos a escala internacional, nacional y de la UE, para reducir la corrupción. En la UE el marco jurídico de lucha contra la corrupción ha avanzado mediante la adopción de legislación contra la corrupción en el sector privado así como con la adhesión de la UE a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), sin embargo, la aplicación del marco jurídico de lucha contra la corrupción sigue siendo desigual de un Estado miembro a otro y, en general, no es satisfactoria. Ello refleja la

ausencia de un compromiso político firme por parte de los dirigentes y las instancias decisorias para luchar contra todas las formas de corrupción.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce que la corrupción es un delito de especial gravedad con una dimensión transfronteriza y que los Estados miembros no están plenamente equipados para combatirla por sí solos; Por ello en 2011, la Comisión aprobó un paquete de medidas para definir la política de la UE contra la corrupción a través de su *Estrategia integral de lucha contra el fraude*, cuyo objetivo general es mejorar la *Prevención, la Detección y las condiciones para las Investigaciones* de fraude, estableciendo principios de buena administración y sugiriendo que los controles sean *Proporcionales, Eficaces y Rentables*, logrando un equilibrio entre la simplificación de los trámites y su coste eficiencia.

La Estrategia establece asimismo un mecanismo de control, el *Informe Anticorrupción de la UE*, destinado a supervisar y valorar los esfuerzos de los Estados miembros en su lucha contra la corrupción, promoviendo así un mayor compromiso político.

Este mecanismo de control contará con el apoyo de un grupo de expertos y una red de corresponsales de investigación, así como con el necesario presupuesto de la UE, el Informe será gestionado por la Comisión y se publicará cada dos años, siendo el primer informe publicado en 2014 COM (2014)308. Dicho informe refleja tanto los logros, como las vulnerabilidades y compromisos de todos los Estados miembros, estableciendo capítulos nacionales. Identifica asimismo tendencias y las deficiencias que deban solucionarse, y estimulará asimismo el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje *inter pares*. Como complemento a este mecanismo, la UE se compromete a participar en el Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO).

3.1. Estrategia conjunta con la OLAF

Para las acciones estructurales, la Comisión ha establecido una *Estrategia conjunta de prevención del fraude*, cuyo objetivo es reforzar su capacidad para hacer frente al fraude, crear conciencia en los Estados miembros y en los servicios de la Comisión respecto de la importancia de la prevención del fraude y fortalecer la cooperación con la OLAF. La OLAF, investiga las acusaciones de fraude y asiste activamente a todos los Estados Miembros e Instituciones de la UE.

Fruto de esta estrategia de colaboración se difundirán las mejores prácticas (por ejemplo, el proyecto de extracción de datos «Pluto») y evaluaciones del riesgo de fraude basadas en la experiencia operativa de la OLAF, así como en la información pertinente que posee la OLAF procedente de los Estados miembros, terceros países y organizaciones internacionales. Esta red deberá contribuir también a desarrollar y actualizar periódicamente las estrategias sectoriales adoptadas por los servicios de la Comisión.

Desarrollo del enfoque «Pluto» para la detección y prevención del fraude:

El proyecto Pluto fue creado para ayudar a la Dirección General de la Sociedad de la Información de la Comisión a mejorar sus capacidades de auditoría y funciones de control a través de potentes herramientas de análisis e información sobre los indicadores de fraude, basándose en la experiencia operativa de la OLAF.

Con este enfoque ha sido posible detectar muchos más casos de presunto fraude. Dado el éxito del proyecto, especialmente en términos de detección oportuna de casos de fraudes, otros muchos servicios operativos de la Comisión se han interesado en la aplicación de este enfoque, cuya difusión se facilitará.

3.2. Ciclo contra el fraude: orientaciones metodológicas y herramientas de la Comisión Europea

Hay cuatro elementos fundamentales en el ciclo contra el fraude: la prevención, la detección, la corrección y la actuación judicial.

La combinación de una minuciosa evaluación del riesgo de fraude, medidas adecuadas de prevención y detección y una investigación coordinada en el momento adecuado por parte de organismos competentes, puede reducir considerablemente el riesgo de fraude y constituir además un importante método disuasorio.

Para poner en marcha cualquier una política/plan/estrategia en este sentido es fundamental que sea sencilla y concreta, debe contener los elementos siguientes:

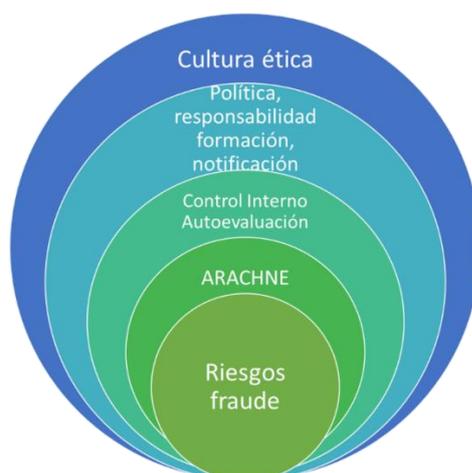
- Estrategias para desarrollar una cultura contra el fraude.
- Reparto de responsabilidades para abordar el fraude.
- Mecanismos de notificación ante la sospecha de casos de fraude.
- Cooperación entre los distintos agentes.

Esta política debe ser bien visible dentro del organismo de que se trate medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos que se hayan detectado.

Dentro de las orientaciones metodológicas sobre la Evaluación del riesgo de fraude elaboradas por la Comisión Europea como una de las medidas que acompañan al primer Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE, encontramos una herramienta de autoevaluación del riesgo de fraude que puede resultar de interés e inspiración para ayudar a la implementación del sistema SALER. Se adjunta link a la herramienta elaborada por la Comisión Europea en la bibliografía de este documento.

La autoridad de gestión debe centrar su objetivo operativo en una respuesta ante el fraude proporcionada a los riesgos existentes y adaptada a las situaciones concretas. En particular, una vez realizada la evaluación del riesgo y puestos en marcha los controles atenuantes en el nivel del sistema, se recomienda a las autoridades de gestión que aborden las situaciones concretas que pueden originarse durante la ejecución de las operaciones, *desarrollando nuevos indicadores de fraude específicos* (indicadores de alerta) y garantizando una colaboración y coordinación efectivas entre todos los niveles administrativos implicados.

La Prevención es una fase clave para reducir las posibilidades de cometer fraude mediante la implantación de potentes sistemas de control interno, junto con una evaluación del riesgo proactiva, estructurada y específica, unido a la adopción de una Política estratégica anticorrupción, reparto de responsabilidades, actividades de formación y concienciación junto con el desarrollo de una «cultura ética» serán sin duda un potente coadyuvante para combatir los posibles comportamientos fraudulentos.



4. BIBLIOGRAFÍA

Acerca de la Convención de Naciones Unidas, texto completo:

https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

- Ratificación española: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-13012

Para más información acerca del cohecho internacional y la Convención Anticohecho de la OCDE: www.oecd.org/daf/nocorruption

Para más información acerca de GRECO: <https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco>

Para más información acerca de la Estrategia Integral Anticorrupción de la Unión Europea:

- Comunicación donde se establece la Estrategia COM(2011)308:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0308>

- Primer Informe 2014 mecanismo de control Anticorrupción:

<http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/1041639>

- Anexo 9 del Informe 2014- Capítulo relativo a España (Documento 2): <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/DOC/?uri=CELEX:52014DC0038&from=ES>

- Indicadores sobre contratación pública:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/public-procurement-indicators-2011_en.pdf.

- Estudio de 2013 sobre detección y reducción de la corrupción en la contratación pública; metodología para estimar los costes directos de la corrupción y otros elementos de un mecanismo de evaluación de la UE: “*Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU -Development of a methodology to estimate the direct costs of corruption and other elements for an EU-evaluation mechanism in the area of anticorruption*», 30 de junio de 2013”, Price Waterhouse Coopers y Ecorys.

- Orientaciones metodológicas para la Evaluación del Fraude y Anexos Herramienta Autoevaluación:

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/guidelines/2014/fraud-risk-assessment-and-effective-and-proportionate-anti-fraud-measures

- Nota informativa sobre indicadores de fraude con ejemplos prácticos, tipos de fraude y sus indicadores: http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/cocof-guidance-documents/2009/information-note-on-fraud-indicators-for-erdf-esf-and-cf

- Estrategia conjunta con la OLAF y Programa PLUTO, p. 6: <http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/200614>

- Presentación sobre la herramienta ARACHNE:

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/anti_corruption/2014_10/doc/mo-lemans_ws2.pdf

(*) La presentación del contenido de este artículo ha recibido financiación a través de la convocatoria pública de la Generalitat Valenciana (DOGV 8064, de 16-6-2017) relativa al Sistema de alertas rápidas en la lucha contra la corrupción.